

0035/2024

La consulta plantea la adecuación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD en lo sucesivo), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD en lo sucesivo), la prórroga del *“Convenio entre el Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Canarias para la difusión e implantación de SIUSS- Sistema de Información de Usuarios de los Servicios Sociales- y su aplicación informática y el intercambio de información”*, (el Convenio en lo sucesivo).

I

Con carácter previo es preciso recordar que este Gabinete Jurídico se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la adecuación del modelo de Convenio al marco jurídico de protección de datos personales, siendo la más reciente a través del Informe 82/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020 en el que adoptaban las siguientes conclusiones:

(...)

Por tanto, habida cuenta de las competencias sobre servicios sociales que ostentan las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos de Autonomía, en lo relativo a los tratamientos de datos personales que requieran la prestación de dichos servicios, las mismas ostentarán la condición de responsables del tratamiento, siendo las que determinan, en su ámbito competencial, los fines y medios del tratamiento, por lo que las mismas ostentan la condición de responsable del tratamiento pudiendo suscribir, a estos efectos, el modelo de convenio remitido, cuyo objeto es, precisamente, la difusión e implantación de SIUSS y su aplicación informática y el intercambio de información, mediante utilización del programa informático, en entorno Web, dentro del ámbito de la Administración Autonómica y las Corporaciones Locales de su territorio, por lo que se trata de una decisión directa adoptada sobre los medios del tratamiento, actuando el Ministerio como encargado del

tratamiento, en los términos que deben recogerse en el convenio de acuerdo con el artículo 28.3 del RGPD.

Habida cuenta la definición de responsable del tratamiento en el RGPD, dicha condición la ostentan en virtud de la competencia que les atribuye el ordenamiento jurídico, incluso en el supuesto en que no tratan directamente los datos personales, ya que lo esencial es su capacidad para decidir los fines y los medios, recordando las Directrices 7/2020 del CEPD que, teniendo dicha capacidad de influencia, no es necesario que el responsable del tratamiento tenga realmente acceso a los datos que se están procesando” (apartado 42).

Por lo tanto, las CCAA tienen la condición de responsable del tratamiento de los datos personales que sean necesarios para la prestación de los servicios sociales que son competencia de las mismas, asumiendo la obligación de difusión e implantación de SIUSS en las Corporaciones Locales de su territorio, sin especificarse en el convenio la forma en la que las CCAA garantizan dicha implantación, si bien se deduce que la misma será potestativa para las entidades locales, al contemplar el propio convenio la existencia de Unidades de Trabajo Social que no utilicen SIUSS como herramienta de gestión para los servicios sociales comunitarios municipales.

Por consiguiente, la implantación en las Corporaciones Locales podrá realizarse a través de los correspondientes acuerdos administrativos, bien mediante la adhesión de las mismas al presente convenio, bien mediante la firma de un convenio específico con su CCAA. En todo caso, las entidades locales mantienen su competencia respecto de los servicios sociales que hayan asumido en los términos anteriormente señalados, decidiendo sobre los fines y los medios, por lo que ostentarán igualmente la condición de responsable respecto de los tratamientos de datos personales necesarios para la prestación de los servicios sociales que son de su competencia, tal y como se indica por la Abogacía del Estado consultante, circunstancia que deberá figurar en el correspondiente instrumento administrativo.

III

Por todo ello, tanto las CCAA como las Corporaciones Locales ostentan, en el ámbito de sus respectivas competencias, la condición de responsable del tratamiento, entendiendo esta Agencia que el modelo planteado, en cuanto que son las CCAA las que suscribe el convenio de

colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que actúa como encargado del tratamiento, es adecuado, al objeto de determinar en dichos convenios las condiciones a las que deberá ajustarse el correspondiente encargo, en las que deberá observarse estrictamente lo dispuesto en el artículo 28 del RGPD, y siendo las comunidades autónomas las que difundirán e implantarán SIUSS entre las entidades locales de su territorio, las cuales ostentarán la condición de responsable respecto a sus propios tratamientos de datos, asumiendo las condiciones del encargo que se han establecido entre la CCAA y el Ministerio en virtud del correspondiente instrumento jurídico.

No obstante, como bien se indica por la consultante, el texto del convenio omite cualquier referencia a la posición jurídica que corresponde a las entidades locales que implanten SIUSS como aplicación informática, debiendo modificarse el mismo al objeto de recoger que las mismas tendrán la condición de responsables del tratamiento, siendo conveniente que en el propio texto se recogiera también la forma en que se procedería a dicha implantación.

De este modo, quedaría clarificada la posición de las partes intervinientes en los tratamientos de datos personales, haciendo constar la condición de las comunidades autónomas y las entidades locales que implanten el sistema como responsables del tratamiento y el ministerio como encargado, de acuerdo con lo previsto en el RGPD.

II

Como se ha indicado, en esta ocasión se plantea la prórroga del Convenio firmado en fecha 17 de septiembre de 2020 entre el Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya copia adjunta a la presente consulta, en la medida en que de acuerdo con la cláusula Décima ha llegado a término al estar prevista una duración de 4 años.

Debe indicarse que el presente informe analizará el Convenio que ahora se pretende prorrogar y la prórroga en sí misma, en la medida en que el Informe 82/2020 analiza un “modelo” de Convenio y ahora se plantea un concreto Convenio, firmado y con plena eficacia entre las partes.

Dicho lo anterior, el presente Convenio es, en términos generales, similar al modelo de Convenio objeto de nuestro Informe 82/2020 antes citado y es de fecha posterior a la emisión del mismo en el que se insistía por parte de esta Agencia en su modificación respecto de la información relativa a las corporaciones locales y la posición que debían ostentar.

En concreto, se indicaba expresamente que *“el texto del convenio omite cualquier referencia a la posición jurídica que corresponde a las entidades locales que implanten SIUSS como aplicación informática, debiendo modificarse el mismo al objeto de recoger que las mismas tendrán la condición de responsables del tratamiento”*.

Sin embargo en el Convenio objeto de prórroga nada consta al respecto, por lo que se reitera la necesidad de su modificación. Recuérdesse que como se ha indicado en reiteradas ocasiones, y en el citado informe *“El RGPD recoge la necesidad de establecer claramente el mapa de intervinientes en todo tratamiento de datos, al objeto de determinar con acierto la atribución de responsabilidades de acuerdo con la citada norma.*

Esta regulación pretende que no queden supuestos de actuación fuera de su ámbito de aplicación, con el fin de dotar a las autoridades de supervisión, de los elementos necesarios para desarrollar su función y en definitiva para brindar a los ciudadanos europeos, la protección que merecen sus datos de carácter personal. Por tanto, cualquier actividad que conlleve el tratamiento de datos personales será atribuible a algún sujeto que cumpla los requisitos de las distintas categorías que ofrece el RGPD.”

Por tanto, se hace necesario incluir el papel de las Entidades Locales citando su posición expresa en el clausulado y a través de anexos, el modelo de acto o instrumento jurídico en virtud del cual se obligan estas para conocer en concreto cómo usaran SIUS, y por tanto determinar los niveles de compartición de información (a que pueden acceder y que aportan al sistema), para así poder aplicar con todas las garantías los principios de finalidad, proporcionalidad y minimización.

III

Por otra parte, en el Convenio que se pretende prorrogar, se indica en la Cláusula Cuarta apartado 2, bajo la rúbrica *“Identificación de los Datos Personales afectados/tratados: En el entorno SIUS se tratan, evalúan y*

analizan los datos relativos a usuarios de los servicios sociales prestados por profesionales en el ámbito de la Comunidad Autónoma”.

Pues bien, dicha mención resulta insuficiente por cuanto se desconoce a qué información en concreto se refiere, y el nivel de concreción de la misma.

Es decir, no es lo mismo tratar únicamente información identificativa, que por ejemplo, los servicios demandados y prestados en relación con un usuario. Este aspecto resulta esencial para determinar la categoría o tipo de datos que están siendo objeto de tratamiento. Y todo ello con independencia de que, como se obliga al Encargado, éste no acceda a datos personales contenidos en SIUSS, pues dicha consideración es irrelevante a los efectos de que se produzca materialmente el tratamiento, y por tanto, el hecho al que esta llamado regular el RGPD y la LOPDGDD.

Por lo tanto, se debería concretar estos aspectos de los datos objeto del tratamiento en el texto del convenio, es decir, qué datos se tratan en el entorno SIUS.

IV

Y en relación con lo anterior, debe indicarse que el objeto del convenio es en síntesis, el tratamiento de información de ciudadanos usuarios de los servicios sociales que se prestan en las distintas Comunidades Autónomas directamente o a través de las Entidades Locales.

En este sentido debe indicarse que, tal como consta en la página web del Ministerio¹, *“Los servicios sociales son los servicios de intervención social profesional que las administraciones públicas ponen a disposición de la ciudadanía para responder a situaciones de especial necesidad. El objetivo es evitar que las personas se enfrenten a barreras tales que les impidan el ejercicio de sus derechos o el disfrute de una vida plena en la comunidad, evitando o reduciendo situaciones de exclusión social o desprotección. Dentro de los servicios sociales se encuentran, por ejemplo, la atención a la dependencia de las personas mayores o con discapacidad, la protección familiar y el cuidado de la infancia que crece alejada de su familia, el acompañamiento en situaciones críticas como la violencia de género, el sinhogarismo, las adicciones o la pérdida de ingresos”*, en consecuencia se deduce claramente que la información que va a ser objeto de tratamiento por el

¹ <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/servicios-sociales/index.htm>

SIUSS puede contener categorías especiales de datos previstas en el artículo 9 del RGPD.

El precepto contempla como tal aquellos datos que *revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física*, y prohíbe su tratamiento salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en su apartado 2.

Pues bien, al margen de que la concurrencia de alguna de las circunstancias que levantan la prohibición de tratamiento (artículo 9.2 RGPD) y de que la determinación de la base jurídica de dicho tratamiento (artículo 6 RGPD) debe ser apreciada por el responsable del tratamiento, debe tenerse en cuenta que al someter a tratamiento a categorías especiales de datos, las obligaciones de responsables y encargados y en definitiva la aplicación del principio de responsabilidad proactiva se impone con mayor intensidad, que se traduce- entre otras medidas- en la realización de un análisis de riesgos teniendo en cuenta esta circunstancia y la adopción de medidas de seguridad adecuadas (artículos 24 y 32), y en todo caso la realización de una evaluación de impacto (artículo 35).

En consecuencia, se estima adecuado que conste en el texto del convenio que el responsable del tratamiento realizará una Evaluación de Impacto con carácter previo a llevar a cabo el tratamiento de datos personales que puede derivarse del objeto del Convenio.

V

Por último debe recordarse que nada consta en el Convenio sobre la adecuación del SIUSS al Esquema Nacional de Seguridad regulado Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo y previsto en el artículo 156.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En el citado Real Decreto, consta en su artículo 3 bajo la rúbrica “Sistemas de información que trate datos personales” lo siguiente:

1. *Cuando un sistema de información trate datos personales le será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento*

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o, en su caso, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, el resto de normativa de aplicación, así como los criterios que se establezcan por la Agencia Española de Protección de Datos o en su ámbito competencial, por las autoridades autonómicas de protección de datos, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente real decreto.

2. En estos supuestos, el responsable o el encargado del tratamiento, asesorado por el delegado de protección de datos, realizarán un análisis de riesgos conforme al artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos y, en los supuestos de su artículo 35, una evaluación de impacto en la protección de datos.

3. En todo caso, prevalecerán las medidas a implantar como consecuencia del análisis de riesgos y, en su caso, de la evaluación de impacto a los que se refiere el apartado anterior, en caso de resultar agravadas respecto de las previstas en el presente real decreto.

Dicho lo anterior, debe recordarse, singularmente, que tal y como viene señalando de manera reiterada esta Agencia, existen diferencias importantes entre la seguridad de la información y la protección de datos de carácter personal, (por todos, Informe 64/2021 sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad), de modo que la seguridad de la información aparece como una obligación más de los responsables y encargados del tratamiento, quienes deberán aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo para los derechos y libertades de los interesados, pero sin que se limite exclusivamente al ámbito de la seguridad de dicha información, en cuanto que la protección de datos personales tiene un ámbito mucho más extenso que abarca, a un conjunto de principios, derechos, medidas y garantías mucho más amplio, entre ellas medidas sobre el concepto del tratamiento, políticas de protección de datos, protección de datos desde el diseño y por defecto o

notificación y comunicación de brechas de datos personales, bajo la garantía administrativa de las “autoridades de control” previstas en dicha normativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, resultaría adecuado que en el Convenio se hiciera referencia al cumplimiento del ENS y las obligaciones que se asumen por parte de responsables y encargados del tratamiento. Debiendo hacerse referencia también, a los tratamientos de datos personales que puedan realizarse como consecuencia de la implantación de medidas de seguridad que tengan un objetivo distinto que la protección de datos personales, cuestión que fue igualmente objeto de análisis en nuestro informe 64/2021.

VI

Al margen de las consideraciones realizadas, y en la medida en que no se han producido cambios significativos entre lo indicado en el Informe de 2020 y el texto del Convenio que ahora se pretende prorrogar, y con la observancia por parte de la consultante de las sugerencias realizadas, se informa favorablemente la prórroga del “Convenio entre el Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Canarias para la difusión e implantación de SIUSS y su aplicación informática y el intercambio de información”